

0030/2025**I**

El objeto del proyecto de real decreto que se informa es el desarrollo del artículo 1.6 de la Ley 2/2024, de 2 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, que dispone que la aprobación del Estatuto Orgánico de la Autoridad se realizará mediante real decreto del Consejo de Ministros. Se informa así dicho Estatuto, en el que se regulan los extremos recogidos en el artículo 93.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 110 de esa Ley, relativo al régimen jurídico aplicable a las **autoridades administrativas independientes**.

De tal modo, el artículo único del real decreto, bajo el título, *“Aprobación del Estatuto Orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil”*, dispone que:

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.6 y la disposición final sexta de la Ley 2/2024, de 1 de agosto, de creación de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil, se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes ferroviarios, marítimos y de aviación civil (en adelante la Autoridad), cuyo texto se inserta a continuación de este real decreto.”

De otra parte, y en lo que al ámbito competencial de esta Agencia se refiere, conviene destacar que las previsiones contenidas en el Real Decreto que se analiza traen causa de la regulación que, la propia Ley 2/2024, de 1 de agosto, establece en relación con la materia relativa a la protección de datos de carácter personal.

Dicha ley, en fase de proyecto, fue objeto de nuestro informe 16/2022, en el que se expusieron diversas sugerencias en orden a la mejora y adecuación del borrador presentado a los mandatos dimanantes de la normativa de protección de datos. En concreto, en el **Punto I** de dicho informe, se aludió a la ausencia de una mención específica a la normativa de protección de datos. Así, aunque el anteproyecto trataba sobre

investigaciones técnicas que implican tratamientos relevantes de datos personales, no se hacía referencia expresa al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ni a la LOPDGDD, salvo una mención puntual y limitada en el artículo 17.3, en relación con la información facilitada a víctimas y familiares.

Por otra parte, también se sugirió la necesidad de un análisis detallado en la Memoria de Análisis de Impacto Normativo (MAIN), al echarse en falta la evaluación detallada de los distintos tratamientos de datos personales previstos en la norma, especialmente en función de la finalidad legítima de la investigación técnica (cual es la mejora de la seguridad).

De otro lado, en nuestro informe 16/2022, se señaló la insuficiente justificación de determinadas decisiones legislativas. Así, se consideró que deberían haberse justificado determinadas decisiones clave, como la comunicación de datos personales reservados a autoridades judiciales o administrativas. A este respecto, se indicó que resulta fundamental detallar cómo se compatibiliza esta comunicación con la finalidad de la norma y con las garantías propias del proceso penal.

También en el Punto I del tan citado informe, **se incidió muy especialmente en la ausencia de una evaluación de impacto** en protección de datos, recordándose que, dada la naturaleza sensible del tratamiento de datos, debería haberse realizado una evaluación sobre dicha materia, e insistiendo en la importancia de incorporar garantías legales adecuadas para salvaguardar los derechos de los afectados.

En concreto, dicho apartado I del informe 16/2022, concluía señalando lo siguiente:

“Como consecuencia de lo indicado, esta Agencia considera necesario que se realice, con intervención del delegado de protección de datos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana un análisis de riesgos y, en su caso, una Evaluación de impacto en la protección de datos, que permita identificar las garantías necesarias que habría que trasladar al presente texto legal.

Asimismo, conviene recordar, tal y como se ha señalado en anteriores informes, que dada la trascendencia que tiene la garantía del derecho fundamental a la protección de datos personales y con la finalidad de permitir que las disposiciones normativas que se tramitan recojan las garantías específicas que resulten necesarias, esta Agencia considera necesario que se impulse una modificación del Real Decreto 931/2017, de 27 de octubre, por el que se regula la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, con el fin de que se incluyan, tanto en el

contenido de la memoria de análisis de impacto normativa como en el de la memoria abreviada, el impacto en la protección de datos personales.”

Por su parte, en el **Punto II** del informe 16/2022, se señalaba que, aunque el anteproyecto de ley mencionaba principios como los de transparencia, participación y cultura justa, **omitía incluir expresamente el principio de protección de datos personales**, a pesar de su relevancia como derecho fundamental. Se recordaba que diversas normas europeas en materia de transporte aéreo y marítimo ya exigían el respeto pleno a la normativa de protección de datos. Además, se destacaba que el RGPD era plenamente aplicable a los tratamientos de datos personales en este ámbito, tanto automatizados como no automatizados, por lo que el anteproyecto debía garantizar su cumplimiento efectivo.

Así, entre otras normas, el Reglamento (UE) Nº 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010, sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil, en su Considerando 34, señala que *“Las normas relativas a los datos, el tratamiento de datos y la protección de las personas establecidas en los actos jurídicos pertinentes de la Unión deben respetarse plenamente en la aplicación del presente Reglamento”*, regulando en su artículo 22.2, el *“Acceso a los documentos y protección de los datos personales”*).

El citado **Punto II** de nuestro informe concluía:

“Por ello, y sin perjuicio de las garantías específicas que, en su caso y como consecuencia de los análisis de riesgos indicados en el apartado anterior, proceda trasladar al texto, debe introducirse en su articulado un artículo específico que incluya una cláusula general de respeto de la normativa de protección de datos personales, en la que se indique que los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el resto de la normativa sobre protección de datos personales”.

En consecuencia, de acuerdo con nuestras anteriores observaciones, y, en concreto, en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos, la **Disposición adicional tercera de la vigente Ley 2/2024**, de 1 de agosto, dispone que:

“Normativa sobre protección de datos de carácter personal.

La Autoridad **garantizará, en todo caso, que el tratamiento de la información en el marco de las investigaciones técnicas** se realice de acuerdo con lo previsto en el **Reglamento** (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la **Ley Orgánica 3/2018**, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en el resto de la normativa sobre protección de datos de carácter personal. La negrita es nuestra

Las eventuales cesiones de información para fines distintos de los de la investigación técnica se realizarán igualmente de acuerdo con la normativa citada en el párrafo anterior, debiendo la Autoridad en estos casos realizar un **análisis previo de los riesgos** que dichas cesiones pueden suponer para la protección de datos de carácter personal, que le permita decidir sobre la necesidad de facilitar datos personales en la cesión de información y ponderar la conveniencia de disociación de los mismos. En caso de determinarse la necesidad de facilitarlos, la cesión conllevará una mención expresa, **como garantía específica**, a la prohibición de su comunicación ulterior, salvo en aquellos casos en los que resulte necesaria para el ejercicio de derechos individuales.” La negrita es nuestra

Sin embargo, según se observa en el texto definitivo de la Ley 2/2024, de 1 de agosto, **no se incorpora** mención alguna a la Evaluación de Impacto en la protección de datos personales (EIDP) a la que se refiere el **Punto I** de nuestro Informe 16/2022, que permita **identificar las garantías necesarias que habría que trasladar al texto legal vigente, o ya, en su defecto, al desarrollo normativo del mismo, cuya ocasión podría aprovecharse a consecuencia del dictado del Estatuto Orgánico que ahora se analiza.**

Pues bien, en el proyecto normativo sometido al presente informe, relativo al proyecto de Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto Orgánico de la Autoridad Administrativa creada por la Ley 2/2024, de 1 de agosto, tampoco se dispone previsión alguna en relación con la Evaluación de Impacto de Datos Personales (EIDP), observándose dicha carencia tanto en la Memoria de Evaluación de Impacto Normativo, como en el propio texto del articulado del reglamento analizado.

Esto es, **de una parte**, en la MAIN del proyecto, dentro del apartado referido a Impactos, se incorpora la descripción de dos tipos de impacto derivados de la regulación contenida en el Real Decreto, 1) El impacto presupuestario, y 2) El Impacto por razón de género. Sin embargo, no se contiene previsión alguna relativa a la Evaluación de Impacto en la protección de datos personales (EIDP). Y, **de otra parte**, el texto del reglamento que se informa —en el que se regulan la existencia de tratamientos de datos de carácter personal (así, por ejemplo, en el artículo 6.3 del borrador del Estatuto Orgánico)— tampoco se incluye mención alguna a la realización, en su caso,

de Evaluaciones de Impacto de Datos Personales cuando esta resulte necesaria.

En definitiva, en lo relativo a la posible Evaluación de Impacto en la protección de datos personales —no habiéndose incorporado a la Ley 2/2024, de 1 de agosto, la regulación sugerida en nuestro anterior informe 16/2022—, **tampoco en el Estatuto Orgánico** que se informa ahora se realiza previsión alguna sobre dicha EIDP.

No obstante lo anterior, el citado artículo 6.3 identifica claramente la existencia de **tratamientos** de datos y del **responsable de dichos tratamientos** en el ámbito de la norma, siguiendo en este punto lo dispuesto en el artículo 4.7 —definiciones— RGPD, al señalar:

“6.3. Los tratamientos de datos de carácter personal **que lleve a cabo la Autoridad** se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” La negrita es nuestra

Se garantiza así la determinación de **responsabilidad** en relación con la realización de los correspondientes tratamientos, en consonancia con la definición del referido artículo 4.7 RGPD, que se refiere a “**7) «responsable del tratamiento» o «responsable»: la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento; si el Derecho de la Unión o de los Estados miembros determina los fines y medios del tratamiento, el responsable del tratamiento o los criterios específicos para su nombramiento podrá establecerlos el Derecho de la Unión o de los Estados miembros.**”

Por su parte, en el **Punto III** de nuestro informe 16/2022, se señalaba que los tratamientos de datos personales realizados por la Autoridad Administrativa Independiente estaban legítimamente basados en el interés público y en el ejercicio de poderes públicos conferidos por ley, conforme al **artículo 6.1.e) del RGPD y al artículo 8.2 de la LOPDGDD**. Además, si durante las investigaciones se tratan datos especialmente sensibles, como los de salud, se permitirá su tratamiento bajo el amparo del **artículo 9.2.g) del RGPD**, por razones de interés público esencial, siempre que se respeten los derechos fundamentales y se apliquen medidas adecuadas de protección.

Sin embargo, se incidía en la idea, *que ahora se reitera*, de que la licitud del tratamiento no exime de cumplir con otros principios del artículo 5 RGPD, como el de **limitación de la finalidad y minimización de datos**, que deben garantizarse en todo caso.

El **Punto IV** del informe 16/2022 destaca que la comunicación de información a víctimas, familiares y asociaciones debe estar justificada en los principios de **transparencia, participación de los interesados y cultura justa**, reconocidos por la normativa europea. En particular, el Reglamento (UE) nº 996/2010 respalda este enfoque al establecer, en su artículo 15.4, el deber de facilitar información a las víctimas o a sus familiares de forma oportuna y precisa, dentro del respeto a la confidencialidad de la investigación, a saber:

“Artículo 15.4: Se autorizará a la autoridad encargada de las investigaciones de seguridad a informar a las víctimas y a sus familiares, o a sus asociaciones, o a publicar cualquier información sobre las observaciones factuales, los procedimientos de la investigación de seguridad, posibles informes preliminares o conclusiones o recomendaciones en materia de seguridad, siempre que ello no perjudique a los objetivos de la investigación de seguridad y se respete plenamente la legislación aplicable a la protección de datos personales.”

De acuerdo con lo anterior, concluíamos que:

“Por consiguiente, la finalidad pretendida con esa comunicación es la de facilitar información sobre el avance de la investigación, que deberá respetar plenamente la normativa sobre protección de datos personales, lo que implica de nuevo citar los principios de limitación de la finalidad, proporcionalidad y minimización de datos. Por lo tanto, debería valorarse, mediante los análisis de riesgos a los que se ha hecho referencia en el primer apartado del presente informe y atendiendo a la experiencia, la necesidad de facilitar datos personales con la finalidad de mantener informadas a las víctimas, sus familiares y a las asociaciones.

En el caso de que no resulte necesario, debería recogerse (...) que dicha información se facilitará previa disociación de los datos de carácter personal. Si resultara necesario, en determinadas circunstancias, facilitar el acceso a los datos de carácter personal, debería recogerse expresamente la limitación a aquellos que resulten estrictamente necesarios, actuando, en el presente caso y como garantía específica, el deber de reserva respecto de los datos personales que tienen carácter reservado. Respecto de los que no lo tengan, teniendo en cuenta que la excepcionalidad en el acceso y que la finalidad pretendida se cumple con la comunicación a las víctimas, sus familiares y, en su caso, a las asociaciones, debería introducirse, como garantía específica, la prohibición de su comunicación ulterior, salvo en aquellos casos en que resulte necesario para el ejercicio de sus derechos.”

El **Punto V** del informe **16/2022**, analizaba la legalidad y los límites de la comunicación de información reservada en el contexto de investigaciones

técnicas de accidentes, regulada en el artículo 19.2 del proyecto de ley que se informaba, cuando dicha información es requerida por órganos judiciales o el Ministerio Fiscal para la persecución de delitos. Esta situación plantea ***un conflicto entre la finalidad preventiva de las investigaciones técnicas y la finalidad punitiva de las investigaciones judiciales***. Según el RGPD, dicho tratamiento puede estar justificado por motivos de seguridad pública, pero debe atender al principio de proporcionalidad. Dichas exigencias se extraen claramente de lo dispuesto en la letra d) del artículo 23.1. del RGPD (limitación con base en “la seguridad del Estado”), al ser necesario el tratamiento de los datos para salvaguardar: *la prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o la ejecución de sanciones penales, incluida la protección frente a amenazas a la seguridad pública y su prevención*.

A este respecto, la normativa europea, especialmente el Reglamento (UE) nº 996/2010, insiste en la necesidad de proteger la confidencialidad de los datos recabados en investigaciones de seguridad, para garantizar un entorno no punitivo que favorezca la comunicación voluntaria de información relevante. Esta normativa reconoce que el objetivo principal de estas investigaciones no es atribuir culpa, sino prevenir futuros accidentes, y que el uso de la información con fines penales podría disuadir a las personas de colaborar.

La Directiva 2009/18/CE, aplicable al transporte marítimo, y otras como la Directiva 2004/49/CE y la Directiva (UE) 2016/798, relativas al sector ferroviario, también subrayan la importancia de mantener separadas las investigaciones técnicas de las judiciales. Estas deben garantizar autonomía, acceso sin restricciones a las pruebas, y no interferencia de procedimientos paralelos que persigan la determinación de responsabilidad penal o civil.

Se destaca que las investigaciones de seguridad deben estar regidas por un estatuto legal claro que asegure su eficacia e independencia. La existencia de investigaciones judiciales no debe impedir ni demorar las técnicas, ni condicionar su desarrollo ni resultados, que deben centrarse exclusivamente en mejorar la seguridad.

Por tanto, se aboga por un equilibrio entre los intereses públicos en juego: la prevención de accidentes y la administración de justicia, sin que uno de ellos prevalezca de forma desproporcionada sobre el otro. Este equilibrio exige un marco legal riguroso que limite el uso judicial de la información técnica y preserve el principio de una cultura justa y no punitiva en los sistemas de transporte.

Además, nuestro **informe 16/2022** concluye que deben establecerse las garantías específicas necesarias al objeto de **evitar** que los datos de carácter personal **sean tratados para una finalidad distinta** que pueda

determinar su responsabilidad sin el conocimiento del afectado. En resumen, concluíamos con la conveniencia de que en el texto legal informado se hiciese alguna referencia, aunque no fuese exhaustiva a cuáles son las garantías establecidas para este tipo de tratamientos, así como la inclusión de **“un apartado específico referido a la información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal”**.

En atención a lo anterior, el artículo 20 de la vigente Ley 2/2024, de 1 de agosto (que modifica y sustituye la regulación contenida en el artículo 19 del proyecto sometido a nuestro informe 16/2022), se ha hecho eco de la existencia de un posible conflicto **entre la finalidad preventiva de las investigaciones técnicas y la finalidad punitiva de las investigaciones judiciales**, concluyendo que:

“Artículo 20. Relaciones con el Poder Judicial y el Ministerio Fiscal.

1. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 17, si en el transcurso de una investigación técnica, se conoce o se sospecha que la comisión de un acto enmarcado en el accidente o incidente de que se trate pudiera constituir un ilícito penal, el investigador o investigadora encargado informará de inmediato para que la Autoridad, a través de la persona que ostente la Presidencia, **lo comunique a la autoridad judicial competente o al Ministerio Fiscal**. La negrita es nuestra

Igualmente, la Autoridad informará **a las autoridades judiciales o al Ministerio Fiscal**, de forma inmediata una vez sea conocedora de cualquier accidente en el que haya víctimas mortales, así como de la intención de desplazar a su personal investigador hasta el lugar del suceso. La negrita es nuestra

2. Cuando respecto de un accidente o incidente determinado se abra también una investigación judicial, tanto la Autoridad como la autoridad judicial competente velarán porque la investigación técnica y los procesos judiciales que pudieran iniciarse en relación con el accidente o incidente objeto de la misma **estén coordinados y se garantice la salvaguarda y compatibilidad de los distintos fines perseguidos por ambas investigaciones**.” La negrita es nuestra

Y, finalmente, tal y como se expuso *ut supra*, la Disposición adicional tercera de la Ley 2/2024, de 1 de agosto —Normativa sobre protección de datos de carácter personal—, contiene un apartado específico referido a la información sobre el tratamiento de los datos de carácter personal, tal y como se sugirió en diversos Puntos de nuestro anterior informe.

II

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo

que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos —RGPD—), y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales —LOPDGDD— conforman el marco jurídico de referencia en España que afecta a la protección de datos de carácter personal. En estas normas se regulan los principios y fundamentos a los que deben ajustarse la recogida y tratamiento de los datos personales por cualquier persona pública o privada que lleve a cabo tratamiento de datos de carácter personal en el ejercicio de su actividad.

Entre otras definiciones, el artículo 4 del RGPD se refiere a «datos personales» como toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. Y «tratamiento» como cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjuntos de datos personales, ya sea por procedimientos automatizados o no, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción.

Según se ha expuesto anteriormente, el proyecto de Real Decreto que se informa identifica claramente la existencia de **tratamientos** de datos y del **responsable de dichos tratamientos** en el ámbito que regula, siguiendo en este punto lo dispuesto en el artículo 4.7 —definiciones— RGPD, al señalar:

“6.3. Los tratamientos de datos de carácter personal **que lleve a cabo la Autoridad** se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.” La negrita es nuestra

Del mismo modo, como también se avanzó en el Punto anterior de este informe, en relación con el cumplimiento de la normativa de protección de datos, la **Disposición adicional tercera de la vigente Ley 2/2024**, de 1 de agosto, dispone que:

“Normativa sobre protección de datos de carácter personal.

La Autoridad **garantizará, en todo caso, que el tratamiento de la información en el marco de las investigaciones técnicas** se realice de acuerdo con lo previsto en el **Reglamento** (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, en la **Ley Orgánica 3/2018**, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y en el resto de la normativa sobre protección de datos de carácter personal. La negrita es nuestra

Las eventuales cesiones de información para fines distintos de los de la investigación técnica se realizarán igualmente de acuerdo con la normativa citada en el párrafo anterior, debiendo la Autoridad en estos casos realizar un **análisis previo de los riesgos** que dichas cesiones pueden suponer para la protección de datos de carácter personal, que le permita decidir sobre la necesidad de facilitar datos personales en la cesión de información y ponderar la conveniencia de disociación de los mismos. En caso de determinarse la necesidad de facilitarlos, la cesión conllevará una mención expresa, **como garantía específica**, a la prohibición de su comunicación ulterior, salvo en aquellos casos en los que resulte necesaria para el ejercicio de derechos individuales.” La negrita es nuestra

En este sentido, según se adelantó, en el proyecto normativo sometido al presente informe tampoco se dispone previsión alguna en relación con la Evaluación de Impacto de Datos Personales (EIDP), observándose dicha carencia tanto en la Memoria de Evaluación de Impacto Normativo, como en el propio texto del articulado del reglamento analizado.

Por otra parte, del mismo modo que en el actual artículo 7 de la Ley **2/2024**, de 1 de agosto, se omite incluir expresamente el principio de protección de datos personales (tal y como se advertía en nuestro anterior informe 16/2022), tampoco en el Real Decreto que se informa se incorpora dicha previsión dentro del marco de los referidos principios, regulados en su artículo 8:

“Artículo 8. Principios de actuación.

1. La actividad de la Autoridad se someterá a los principios de planificación, evaluación y control de gestión, mediante la definición de objetivos específicos, la distribución racional de recursos y la implementación de sistemas que permitan el seguimiento, análisis y valoración de los resultados obtenidos, garantizando la eficacia y la eficiencia en cumplimiento del interés general.
2. La Autoridad actuará bajo el principio de transparencia en la gestión y estará sometida a control de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de este Estatuto.”

De tal suerte, se reitera en este punto la necesidad de incluir expresamente el pleno respeto y cumplimiento de la normativa de protección

de datos dentro de los principios de actuación de *la Autoridad*, sugiriéndose así la modificación, por adición, del artículo transcrito, que podría adoptar la siguiente redacción, u otra similar:

“Artículo 8. Principios de actuación.

1. La actividad de la Autoridad se someterá a los principios de planificación, evaluación y control de gestión, mediante la definición de objetivos específicos, la distribución racional de recursos y la implementación de sistemas que permitan el seguimiento, análisis y valoración de los resultados obtenidos, garantizando la eficacia y la eficiencia en cumplimiento del interés general.
2. La Autoridad actuará bajo el principio de transparencia en la gestión, **con pleno cumplimiento de lo dispuesto en la normativa de protección de datos**, y estará sometida a control de conformidad con lo dispuesto en los artículos 61 y 62 de este Estatuto.” La negrita es adición sugerida

No obstante lo anterior, se entiende plenamente acertada y ajustada a derecho, la redacción del artículo 6.3 —referido al “Régimen Jurídico”—, más arriba transcrito, del que se obtiene el pleno sometimiento de todos los tratamientos de datos realizados en el ámbito de actuación de *la Autoridad* a lo dispuesto en la normativa de protección de datos.

III

El Real Decreto consta de un artículo único, cinco disposiciones adicionales, cuatro disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y cuatro disposiciones finales y el Estatuto de la Autoridad, que este aprueba, que consta de 62 artículos, distribuidos a lo largo de cinco capítulos.

La Disposición adicional quinta, dentro de las *Medidas de funcionamiento*, establece en su apartado 2 c) la designación de un Delegado de Protección de Datos de Carácter Personal.

A este respecto, conviene recordar que el nombramiento del Delegado debe efectuarse de conformidad con lo dispuesto por la legislación vigente en materia de protección de datos, de acuerdo con la regulación del artículo 37 del RGPD y del artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

En consecuencia, dicho Delegado deberá ser designado atendiendo a sus cualidades profesionales y, en particular, a sus conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de protección de datos y a su capacidad para desempeñar las funciones que tiene encomendadas.

Por su parte, las funciones de los Delegados son las detalladas en la Sección 4 del Capítulo IV del Reglamento General de Protección de Datos y

en el Capítulo III del Título V de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

En los artículos **14, 15 y 16** del proyecto, se regulan, respectivamente, el Sistema de respuesta ante accidentes e incidentes, en los que se incluye (i) la información pública sobre el accidente e incidente, en especial a las víctimas y a sus familiares —letra f) del párrafo 2—, (ii) el Sistema de atención a las víctimas y sus familiares, y a las asociaciones de víctimas, y (iii) el Sistema de protección de la información.

En concreto, el Sistema de protección de la información del **artículo 16**, se sustenta en las siguientes bases:

“1. La Autoridad dispondrá de un sistema de protección de la información que garantice la confidencialidad de la información de carácter reservado, de la información sujeta a derechos de propiedad intelectual o industrial **y de los datos de carácter personal, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 2/2024, de 1 de agosto.** La negrita es nuestra

2. El sistema se compondrá de un conjunto de procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información y adoptará un enfoque basado en la gestión de riesgos.

3. El acceso a la información reservada será restringido al personal estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de la Autoridad y se establecerán los oportunos mecanismos de autenticación, autorización y trazabilidad.

4. Los tratamientos de datos de carácter personal que lleve a cabo la Autoridad en el marco de las investigaciones técnicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto a las disposiciones que conforman el régimen jurídico que rigen la protección de los mismos. La negrita es nuestra

Las eventuales cesiones para fines distintos de la investigación se realizarán de acuerdo con la normativa aplicable, debiendo la Autoridad proceder conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2024, de 1 de agosto. La negrita es nuestra

5. La Autoridad revisará y actualizará periódicamente las políticas y procedimientos relacionados con la protección de la información, adaptándose a los avances tecnológicos y los cambios normativos.”

Pues bien, en relación con el transcrito precepto, se sugiere su modificación en orden a concretar de **forma expresa y taxativa** el pleno sometimiento de los citados tratamientos a la normativa de protección de datos, tanto en lo relativo al RGPD y la LOPDGDD, como, en su caso, a la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

A dichos efectos, se sugiere la siguiente redacción alternativa del artículo 16:

“1. La Autoridad dispondrá de un sistema de protección de la información que garantice la confidencialidad de la información de carácter reservado, de la información sujeta a derechos de propiedad intelectual o industrial **y de los datos de carácter personal, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.** La negrita es adición sugerida

2. El sistema se compondrá de un conjunto de procedimientos que garanticen la autenticidad, confidencialidad, integridad, disponibilidad y trazabilidad de la información y adoptará un enfoque basado en la gestión de riesgos, **mediante el análisis de estos, y procediendo cuando fuera preciso a la realización de Evaluaciones de Impacto en protección de datos.** La negrita es adición sugerida

3. El acceso a la información reservada será restringido al personal estrictamente necesario para el cumplimiento de los fines de la Autoridad y se establecerán los oportunos mecanismos de autenticación, autorización y trazabilidad.

4. Los tratamientos de datos de carácter personal que lleve a cabo la Autoridad en el marco de las investigaciones técnicas se realizarán con estricta sujeción a lo dispuesto a las disposiciones que conforman el régimen jurídico que rigen la protección de los mismos.

Las eventuales cesiones para fines distintos de la investigación se realizarán de acuerdo con la normativa aplicable, debiendo la Autoridad proceder conforme a lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 2/2024, de 1 de agosto, **y, en su caso, a lo dispuesto en la Ley**

Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, asegurando la compatibilidad de los fines previstos en cada caso por el ordenamiento jurídico. La negrita es adición sugerida

5. La Autoridad revisará y actualizará periódicamente las políticas y procedimientos relacionados con la protección de la información, adaptándose a los avances tecnológicos y los cambios normativos, **con especial observancia de lo previsto en el Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.** La negrita es adición sugerida

IV

De acuerdo con el artículo 6.1 del RGPD, **para que el tratamiento** de los datos de carácter personal de los afectados por los tratamientos de datos realizados a consecuencia de las previsiones sobre accidentes y/o incidentes contenidas en la norma que se informa **sea “lícito”**, resulta necesario establecer las bases jurídicas que amparan dicho tratamiento. A este respecto, la base jurídica que legitima el tratamiento de los datos de carácter personal de las personas afectadas es la prevista en el artículo 6.1.e) RGPD, cuando dispone que *“e) el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento.*

En su caso, la base jurídica que **ampara la cesión** de datos con información personal obrante en los expedientes sobre accidentes y/o incidentes a favor de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, cesionarios de la información comunicada, resulta ser la misma que la que legitima el tratamiento de los datos por parte de la Autoridad Independiente (artículo 6.1.e RGPD), **concurriendo en los cesionarios el título competencial correspondiente, dimanante de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo**, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

No obstante lo anterior, la comunicación de información entre la Autoridad Independiente y los órganos judiciales y/o el Ministerio Fiscal deberá ajustarse a los principios relativos al tratamiento de datos regulados en el artículo 5 RGPD, y, muy especialmente, al principio de limitación de la finalidad —ex artículo 5.1.b)— según el cual los datos personales serán *“b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con dichos fines; de acuerdo con el artículo 89, apartado 1, el tratamiento ulterior de los datos personales con*

finés de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se considerará incompatible con los fines iniciales («limitación de la finalidad»).»

En el artículo 22.3 del proyecto, referido a las Funciones del Consejo — en relación con el régimen de la información y de la protección de la información en poder de la Autoridad—, se señala que, entre otras, le corresponde:

“b) Velar por la protección de la información que tenga carácter reservado, de la propiedad intelectual e industrial y de los datos de carácter personal, en los términos establecidos en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, adoptando las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la misma.”

Según se observa, también en este precepto, se sugiere la correspondiente modificación, añadiendo el sometimiento a la normativa de protección de datos. En consecuencia, podría adoptarse la siguiente redacción u otra similar:

“b) Velar por la protección de la información que tenga carácter reservado, de la propiedad intelectual e industrial y de los datos de carácter personal, en los términos establecidos en la Ley 2/2024, de 1 de agosto, **en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales**, adoptando las medidas necesarias para garantizar la confidencialidad de la misma.” La negrita es adición sugerida

Por otra parte, en el artículo 24 del real decreto, *Funciones de la persona titular de la Presidencia de la Autoridad*, se establece un amplio elenco de atribuciones, entre las que, a los efectos que aquí interesan, destacan:

“l) Resolver las solicitudes de acceso a la información de carácter no reservado, obtenida en el marco de una investigación técnica, o de otra información obrante en la Autoridad, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

m) Aprobar la implantación del Sistema interno de información de la Autoridad y designar al «Responsable del Sistema», así como su

destitución o cese, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 8 de la Ley 2/2023, de 20 de febrero.”

Por su parte, en relación con las funciones de la Secretaría General, el artículo 28.4, letra o), señala que:

“o) El ejercicio para el ámbito de la Autoridad de las competencias relativas al delegado de protección de datos previstas en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.”

Sin embargo, ni en uno ni en otro caso, esto es, ni en el artículo 24, ni en el 28, ni tampoco en ningún otro precepto del proyecto que se informa, se señala la competencia para la resolución de las reclamaciones de los afectados en relación con el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, reconocidos en los artículos 15 y ss. del RGPD, por lo que se sugiere la incorporación de un artículo, o de un párrafo de un artículo, en el que se señale la identidad del órgano o servicio que, dentro de *La Autoridad*, ostente la competencia para la resolución de tales reclamaciones.

V

En conclusión, se sugiere la modificación de los preceptos a los que se ha hecho cumplida mención en el cuerpo del presente informe, en los términos en los que ha quedado expuesto.

En síntesis, los artículos a los que se refieren nuestras observaciones, analizados en los Puntos anteriores son los que, en el proyecto de Real Decreto presentado a informe, se enumeran como:

- **Artículo 8.** *Principios de actuación.*
- **Artículo 16.** *Sistema de protección de la información.*
- **Artículo 22.3.** *Funciones del Consejo*
- Asimismo, se sugiere la introducción de una **Evaluación de impacto** en la protección de datos, realizada —en su caso— a consecuencia del correspondiente análisis de riesgos, que permita identificar las garantías necesarias que habría que adoptar en relación con determinados tratamientos

de datos. Dicha previsión normativa podría incardinarse en el **artículo 6.3** del proyecto sometido a informe, mediante la adición de un párrafo final.

- Se sugiere la incorporación de un artículo, o de un párrafo de un artículo, en el que se señale la identidad del órgano o servicio que, dentro de *La Autoridad*, ostente la competencia para la resolución de las reclamaciones de los afectados en relación con el ejercicio de sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación del tratamiento y portabilidad, reconocidos en los artículos 15 y ss. del RGPD.